

## ¿ADIÓS A LA UNIVERSIDAD?\*

ADRIÁN ACOSTA  
SILVA\*\*

### Resumen

Con el auge de la nueva economía y de la sociedad de la información y del aprendizaje, las universidades se han visto atrapadas en una serie de tensiones y desafíos que han minado gradualmente su capacidad para responder a un nuevo entorno. Hoy el conocimiento fluye por la tecnología en una sociedad multicéntrica donde las empresas, los sitios de Internet, o individuos o grupos organizados para ofrecer nuevos conocimientos e información, tienden a desplazar a la universidad como centro privilegiado para la generación, distribución y almacenamiento de conocimiento en las sociedades modernas. La nueva generación de desafíos a la universidad tiene su origen en las afueras y en las periferias del campus universitario. En esta suerte de búsqueda del “orden perdido” de la universidad y de la educación superior el papel de las políticas es crucial.

Palabras clave: conocimiento, universidades, globalización.

### Abstract

With the boom of the new economy and of the society of information and learning, universities have found themselves trapped in a series of stressing circumstances and challenges which have gradually undermined their capacity to cope with the new environment. In modern times, knowledge flows through technology in a society where companies, websites, individuals or groups organized to offer knowledge and information tend to substitute universities as sole source of generation, distribution and keeping of such knowledge. Challenges emerge outside and around the campus. Policies play a key role in the search for “the lost order” of universities and higher education.

Key words: knowledge, universities, globalization.

.....  
\* Ponencia presentada en el Congreso “Retos y expectativas de la universidad”, Nuevo Vallarta, Nay., 18-20 de octubre de 2001.

\*\* Profesor investigador del CUCEA-Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Correo e: aacosta@

cucea.udg.mx

Recepción: 15 de enero de 2002.

Aceptación: 30 de abril de 2002.

La civilización capitalista es racionalista y “antiheroica”; las dos cosas a la vez, por supuesto.

Joseph Schumpeter, 1942

Un fantasma recorre desde hace tiempo el mundo, no como alma en pena sino como el espejo nómada y trizado de los nuevos tiempos de la civilización capitalista: la revolución del conocimiento. Es un fantasma, como todos, extraño y misterioso, que recorre los pasillos y las aulas universitarias, pero ahora también habita páginas y direcciones de Internet, despachos de consultorías privadas, *think tanks* de todo tipo, y laboratorios de cientos de empresas en el mundo. Su expansión y ubicuidad ha trastornado los límites entre lo público y lo privado, y sus efectos forman parte de las preocupaciones de los hombres del Estado y los hombres de negocios. Algunos sociólogos y politólogos han atestiguado su presencia, aunque otros niegan rotundamente sus apariciones. Los científicos de las ciencias duras experimentan en sus respectivos campos de estudio la presencia constante del fenómeno, y muchas empresas han establecido estrategias para invocarlo sistemáticamente. Es un fantasma que amenaza con sus apariciones el lugar donde se configuró y alcanzó plena legitimidad en las sociedades modernas: la universidad. Pero con el auge de la nueva economía y de la sociedad de la información y del aprendizaje, las universidades se han visto atrapadas en una serie de tensiones y desafíos que han minado gradualmente su capacidad para responder a un entorno que ya no es desde hace tiempo lo que solía ser. Nunca como hoy el conocimiento fluye por los mares embravecidos de la tecnología en una sociedad multicéntrica, y son las empresas, los sitios de Internet, o individuos o grupos organizados para ofrecer nuevos conocimientos e información, los que tienden a desplazar a la universidad como centro privilegiado para la generación, distribución y almacenamiento de conocimiento en las sociedades modernas.

Las universidades y el Estado han sido inca-

paces de prever y adaptarse al fenómeno. Si los profesionales de la ciencia robaron en el siglo XV sus secretos a los artesanos, alquimistas y parteras para generar los cimientos de la ingeniería, la química y la medicina, en el siglo XXI lo que veremos, muy probablemente, es como tras largos siglos de institucionalización del conocimiento en las universidades y las escuelas de nivel superior, los piratas de la red, las redes empresariales pequeñas y grandes, y organizaciones de ciudadanos altamente escolarizados, robarán los secretos de elaboración de la ciencia y la tecnología a las universidades para competir por recursos, prestigio y dinero en el mundo opaco y hostil del mercado. De hecho ya algunas instituciones, dada la velocidad y fuerza del fenómeno, han comenzado a reaccionar para tratar de mantener una presencia legítima y reconocida en una sociedad donde las redes del aprendizaje ya no fluyen solamente por las escuelas: el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), por ejemplo, el año pasado liberó trescientos cursos en línea en sus páginas de Internet, abiertas al público, para cursarlos desde la soledad de cualquier computadora personal, para luego ser acreditadas y certificadas por el propio Instituto.

Este y muchos otros esfuerzos similares por sintonizar la capacidad y legitimidad de la universidad en un contexto de cambios acelerados y múltiples no ha sido un efecto inducido desde las universidades, como suele suceder en este tipo de organizaciones burocráticas, sino una estrategia de adaptación institucional y en algunos casos desesperada, a los desafíos y necesidades del entorno. También el descubrimiento de nuevos campos científicos como el de la genética y el de la biotecnología han sido posibles gracias a ciertas “externalidades” de las universidades conformadas por periferias habitadas por esfuerzos mixtos entre investigadores de laboratorios de empresas privadas, científicos universitarios y patrocinios gubernamentales. En cualquier caso, la nueva generación de desafíos a la universidad tiene su origen en las afueras y en las periferias del *campus* universitario (Enzensberger, 2001).

El conocimiento científico y tecnológico a lo largo del siglo XX fue considerado genéricamente como un bien público, pero hacia comienzos del nuevo siglo circula cada vez más como un bien privado. Conocer implica poder, como lo señalaba desde hace doscientos años Kant, pero cuando el Estado y el mercado se disputan la función de producir conocimiento ese poder se expande y se contrae al ritmo de las tensiones entre los esfuerzos públicos y los beneficios privados del proceso. El ascenso del *Welfare State* en Europa después de la segunda guerra mundial, basado en la legítima intervención estatal en el mercado para redistribuir riqueza en sociedades no sólo heterogéneas y plurales sino también desiguales, implicó también la formulación de un paradigma educativo donde las universidades se constituyeron como el eje de la producción y difusión del conocimiento, ya sea mediante el apoyo de organismos del estado como en Francia o mediante la cooperación estrecha entre las universidades, las empresas y el estado, como en Alemania o en Gran Bretaña. El control gubernamental directo o indirecto de la universidad fue un proceso legítimo y esperado, un mecanismo capaz para crear no solamente los nuevos profesionistas y funcionarios de una estatalidad en expansión, sino también para establecer sistemas nacionales de ciencia y tecnología capaces de proporcionar a empresas privadas, públicas y agencias estatales los recursos cognitivos y tecnológicos necesarios para mejorar la producción económica y el bienestar social.

Pero es en los años ochenta, cuando la crisis económica y el declive del Estado social se combinaron con la tercera revolución industrial y la revolución del conocimiento, donde puede identificarse el punto de arranque de una nueva onda de larga duración que comenzaba a transformar las relaciones entre las instituciones especializadas, la producción del conocimiento y la innovación tecnológica. Al cambiar las fuentes de riqueza de los recursos naturales o manufacturados a la producción de conocimiento, las universidades y las empresas comienzan a habitar

un nuevo universo de relaciones y requerimientos que ya no pueden abordar con las mismas fórmulas del pasado remoto y reciente (Thurow, 1999). Las empresas, bajo las reglas de la competencia y la eficiencia tienen que reinventar constantemente sus capacidades de supervivencia en el mercado, y las universidades comienzan a ver amenazada su posición y funciones en un mundo definitivamente postindustrial y en algún sentido ciertamente postmoderno. Hasta poco antes de la invención de la Internet y el complejo científico-tecnológico que la soporta, prácticamente nadie en el mundo cuestionaba la importancia y el monopolio que la universidad tenía en la producción y distribución de la ciencia y la tecnología. Pero al expandirse la influencia de las nuevas tecnologías los patrones rígidos, tradicionales, de producción del conocimiento pronto comenzaron a desafiar la función misma de la universidad. En esas circunstancias, la nueva economía del conocimiento emerge como un campo que ha estudiado la manera en que se produce la riqueza en el contexto de la sociedad de la información y del conocimiento, y de los desafíos que ello implica para instituciones tradicionales como la universidad (OCDE, 2000).

Pero la nueva economía y el impacto de las nuevas tecnologías son fenómenos que van estrechamente ligados a la emergencia de diversos modos de interacción social visibles en las rutinas cotidianas de millones de personas en todo el mundo. Hoy como ayer, la sociología de la vida cotidiana revela la alteración de las costumbres y los comportamientos que producen directa o indirectamente el consumo masivo de las innovaciones tecnológicas, médicas o de comunicación. El descubrimiento de las vacunas, o la invención de la luz eléctrica, el teléfono y el automóvil implicaron una revolución silenciosa de los hábitos, “esos grandes desconocidos de la historia”, según señalaba hace tiempo Fernand Braudel. Ni la revolución socialista ni la democracia capitalista alcanzaron el nivel ni la profundidad que han tenido en la alteración de la vida cotidiana de las personas y de los grupos las innovaciones

tecnológicas y científicas. El capitalismo es el contexto y motor de esa revolución de las costumbres, “el perpetuo huracán de destrucción creadora”, como decía Schumpeter, con todas las paradojas, tensiones y conflictos que ello tiene en términos políticos y sociológicos. Y si bien es cierto que, en su esencia, el capitalismo “es un orden social que organiza y gasta sus energías en pos del capital”, como señala Robert Heilbroner en su provocador *Visiones del futuro* (1996), no es menos cierto que ello tiene un impacto profundo en la vida de los individuos, de sus prácticas e imaginarios cotidianos, que cada vez más transcurren paralelos con las invenciones de la ciencia y la tecnología.

Hay algo de misterio y mucho de incertidumbre en la manera en que esta nueva revolución cambia el orden de las cosas en universidades como las mexicanas. Por principio de cuentas, la velocidad de producción del conocimiento sobre múltiples campos de las ciencias supera con mucho la capacidad de procesamiento y distribución de las pesadas estructuras universitarias, cuyas autoridades están más preocupadas por las cuestiones políticas, es decir, por tratar de evitar que “toda la gente se le ponga brava al mismo tiempo” (la frase es cortesía del politólogo Antonio Camou), que por tratar de generar condiciones para interpretar y “tematizar” la revolución científico y tecnológica que recorre el mundo. Cada nuevo proyecto que intenta desarrollar un investigador solitario o un grupo de investigadores se enfrenta a la siempre titánica tarea de elaborar un *state of art* del conocimiento científico en cada tema, cuando el conocimiento sobre un tema o un tópico avanza geométricamente en las sociedades modernas. Es un típico problema de arritmia entre la “fiebre” del conocimiento y la “tortuga” de la investigación, pero un contexto donde el aprendizaje ya no transcurre por las vías tradicionales. El fenómeno tiene ya sus consecuencias en muchas universidades públicas de América Latina, donde a la tradicional conflictividad política de sus instituciones se le ha añadido una larga lista de tareas relacionadas con

la evaluación, la calidad y la “excelencia”, cuyo costo (generalmente invisible) descansa sobre los escasos recursos de las propias universidades (Neave, 2001), en un proceso perverso y circular que termina por ensanchar aún más la brecha entre el conocimiento y la capacidad institucional de investigación y registro de “lo nuevo”. Las excepciones (que las hay) sólo confirman la regla.

La defensa de la universidad pública mexicana exaltando el cumplimiento de su “misión social”, sus contribuciones a la justicia social, su función para formar profesionales comprometidos, o para la creación de una conciencia nacional, entre otros, son históricamente correctos y socialmente pertinentes, pero en el nuevo contexto, parecen ser cada vez más llamados heroicos a la preservación de una institución que desde hace tiempo dejó de ser lo que era. Y la civilización capitalista, como dice otra vez Schumpeter, es racional pero también antiheroica, es decir, es un orden social que tiene la tendencia a jeraquizar y diferenciar los problemas, pero es también una civilización cuyo mecanismo central, el mercado, funciona como un auténtico filtro darwiniano capaz de hacer desaparecer a aquellas ideas e instituciones que descansan solamente en supuestos heroicos.

Entre la larga lista de déficits que podemos enumerar en la universidad mexicana contemporánea en estos tiempos difíciles se encuentra, creo que en primer lugar, el de su capacidad institucional para resolver sus desafíos internos y externos. No obstante los numerosos cambios y transformaciones que a lo largo de los años noventa experimentaron varias universidades públicas, así como la modificación del perfil de la intervención estatal en el campo de la educación superior, sería insostenible afirmar que ello ha propiciado la existencia de un sistema nacional de educación superior o la emergencia de un nuevo “modelo” de universidad pública. La persistencia de la crónica alta dependencia de nuestras universidades del financiamiento público, la concentración de la matrícula estudiantil en un puñado de carreras tradicionales, o la

centralidad de la política como centro regulador de la vida académica y administrativa de nuestras universidades, son sólo algunos de los hechos que desafían cualquier visión optimista del verdadero alcance de los cambios que observamos a lo largo de la década pasada.

Las políticas de incentivos ciegos que fueron el eje de las políticas públicas federales a lo largo del periodo intentaron sustituir a las políticas de patrocinio benigno y negligente que ocurrieron en los años dorados del “desarrollismo” universitario, es decir, aquel tipo de expansión de las fronteras universitarias que combinó crecimiento explosivo de la población estudiantil y magisterial con la burocratización anárquica y el desequilibrio de la organización de la universidad. No contamos aún con información precisa ni contundente que nos permita evaluar con claridad los efectos de esas políticas basadas en incentivos instrumentadas en la última década, pero sí tenemos los registros cotidianos que hablan de su enorme dispersión y fragilidad en términos del sistema y de las instituciones de educación superior. Las universidades públicas, en particular, se adaptaron de manera pragmática e incremental a los cambios en las políticas federales, creando nuevas carreras, equipando con flamantes computadoras los campus universitarios, contratando nuevos académicos o reconvirtiendo a sus jóvenes o viejos profesores mediante el filtro purificador del posgrado a casi cualquier precio en casi cualquier institución nacional o extranjera que ofreciera maestrías o doctorados con el costo más bajo o el tiempo más corto posibles. El resultado de todo ello, que sin duda ha tenido un alto costo público dado el hecho que ocurrieron en tiempos sociales y financieramente difíciles, aún no lo sabemos con claridad.

Pero quizá la mayor de las capacidades que ha perdido la universidad y en general la escuela en México y en el mundo en un contexto de cambio vertiginoso es la de hacer inteligible el proceso y el sentido de esos cambios. Nuestras instituciones de educación superior, erosionadas severamente

por restricciones financieras y conflictos políticos, han perdido desde hace tiempo la capacidad de generar ideas, de producir mapas interpretativos que permitan comprender los nuevos fenómenos y debatir racionalmente alrededor de ellos. Esa es, en realidad, la nueva “misión de la universidad”, una misión que difícilmente puede producir el mercado. Las ideas, decía Weber a finales del siglo XIX, tienen consecuencias políticas. Hace ya más de dos siglos, el poeta alemán Heine advirtió a los franceses que no subestimaran el papel de las ideas; los conceptos filosóficos criados en la quietud del cuarto de estudio de un profesor podrían destruir una civilización. Hoy, que la velocidad del cambio tecnológico y científico abrumba y sorprende a filósofos, economistas y sociólogos, a funcionarios y ciudadanos, las ideas parecen escasas, limitadas y pobres para entender lo que ocurre en el nuevo mundo global y tecnológico. Esa antigua casa del saber que son las universidades, desde hace tiempo han pasado a ser parte del paisaje en una sociedad de nómadas y piratas, hijos de la libertad y fanáticos de la competencia y la tecnología. Recuperar esa capacidad, estimulando el debate intelectual y político, es, quizá, una de los desafíos centrales para rediseñar a la universidad no solamente en el contexto de la sociedad del conocimiento, sino para formular nuevos arreglos institucionales con el Estado y con la sociedad orientados a conciliar, nuevamente, la libertad académica con el compromiso público de la universidad.

En esta suerte de búsqueda del “orden perdido” de la universidad y de la educación superior el papel de las políticas es crucial. En un contexto social marcado por la incertidumbre y el cambio, de transformaciones vertiginosas en el papel y el desempeño del Estado pero también por el proceso de individualización de la vida social, la elaboración e instrumentación de políticas públicas en el campo de la educación superior universitaria es un proceso que requiere *de la política*, es decir, del acuerdo y la negociación entre visiones y concepciones diferentes de los que debe y puede hacerse con la educación superior.

La política, ya lo sabemos, es la pesadilla de los tecnócratas y de muchos de nuestros empresarios y autoridades públicas, pero sin ella cualquier intento de transformación significativa de la educación superior que intente conciliar libertad académica, autonomía institucional, *accountability*, y financiamiento público o privado suficiente y consistente en el tiempo, llevará a lo mismo que hemos visto en el pasado reciente: la persistencia de nuestros viejos problemas y la incertidumbre respecto del futuro de nuestras universidades. Hay que recordar al siempre pertinente Gourevitch (1993): “La prosperidad oscurece una verdad que los tiempos difíciles ponen en claro: la elección hecha entre propuestas conflictivas surge de la política. La interpretación triunfante será aquella cuyos partidarios tengan el poder suficiente para dar a su opinión la fuerza de ley”.

Pero la otra dimensión de los nuevos arreglos institucionales que requiere la universidad pública tiene que ver con la vida interior de nuestras organizaciones académicas. Sería de una ingenuidad enternecedora suponer que solamente con un acuerdo y cambio en las políticas públicas federales de educación superior podríamos, ahora sí, iniciar la construcción de un verdadero sistema nacional de educación superior o comenzar a resolver exitosamente los viejos y nuevos problemas que enfrentan nuestras universidades públicas. Más realista (y arriesgado por supuesto), es asumir que son los cambios internos de las instituciones de la educación superior los que pueden asegurar un tránsito gradual hacia una educación centrada en el aprendizaje, la investigación y los códigos académicos que garanticen la legitimidad social y la capacidad institucional de nuestras universidades públicas. Y aunque ello es un proceso que ya ha iniciado en varias instituciones singulares, una agenda cargada y cruzada se impone en las tareas de la nueva generación de reformas universitarias, que pasan, como toda agenda que se respeta, por la formulación de un conjunto de preguntas para las cuales aún no contamos con respuestas precisas: ¿qué tipo de gobierno

universitario asegura un mejor desempeño académico? ¿Son los mejores modos o estilos de gestión aquellos centrados en el ejercicio clientelar o patrimonialista para asegurar buenos niveles de calidad académica? ¿Es viable la intención de crear universidades de investigación en contextos institucionales surgidos y desarrollados en tradiciones fuertemente profesionalizantes?. En los tiempos del “potsindicalismo”, ¿qué papel pueden o deben jugar las organizaciones gremiales de nuestras universidades? ¿Qué rol pueden jugar las organizaciones estudiantiles? ¿Cuál es o debería ser la función de los gobiernos locales en relación con las universidades estatales? ¿Puede haber políticas federales de educación superior sin políticas estatales deliberadas y activas en el nivel local y regional? Estas preguntas y seguramente muchas otras más, están en el corazón de la nueva agenda institucional de reformas que parecen indispensables para avanzar en la renovación de nuestras universidades. Definirlas con precisión y generar las condiciones para su abordaje productivo, requiere no sólo de voluntad política o de buenas intenciones (aunque eso ayuda), sino de la capacidad institucional para instrumentar acciones y estrategias específicas de transformación de mediano y largo plazo. En otras palabras, la nueva generación de reformas universitarias es un asunto de poder, no de voluntarismo, una cuestión de creación de recursos, organización y capacidades institucionales que permitan a los actores involucrados (comunidades y autoridades universitarias, gobiernos locales y federal) encontrar fórmulas políticas de acuerdo para diseñar e instrumentar políticas financieras, de rendición de cuentas, de equidad o de calidad, orientadas hacia la creación de capacidades institucionales y sistémicas adecuadas a los nuevos tiempos de la vida social, económica y política del país. Construir y renovar cíclicamente ese poder institucional es, me parece, el desafío maestro de las políticas de educación superior del siglo XXI.

## Referencias

---

ENZENSBERGER, H.M (2001). “La nueva utopía”, *Nexos*, núm. 283, julio.

GOUREVITCH, Peter (1993). *Políticas estratégicas en tiempos difíciles*, México, Fondo de Cultura Económica.

NEAVE, Guy (2001). *Educación superior: historia y política. Estudios comparativos sobre la universidad contemporánea*, Barcelona, Gedisa.

OCDE (2000). *Knowledge Management in the Learning Society: Education and Skills*, París.

THUROW, Lester C. (1999). “Building Wealth”, *The Atlantic Monthly*, vol. 284, n. 6, Junio.